

VENEZUELA: una década de desarrollo capitalista

James Petras

La economía política del estancamiento

El principal defecto de las estimaciones relativas a la política venezolana, consiste en la grave subestimación de los problemas económicos y sociales —o más, de desarrollo— a largo plazo generados a partir de la última década, así como de su impacto en la política.

La economía venezolana ha estado estancada a lo largo de la década de 1960, mientras que las desigualdades entre las clases se han acentuado. El índice de crecimiento **per cápita** ha sido en 1961--66 de 1%, o sea, 60% **menos** que la tasa mínima de desarrollo planteada en la Alianza para el Progreso (2,5%).¹ En 1968 subió ligeramente a 1,6%. Después de diez años, Venezuela sigue siendo extremadamente dependiente de la industria petrolera, de la cual 90% pertenece a corporaciones norteamericanas.² El petróleo constituye

¹ Consejo Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP). «El esfuerzo interno y las necesidades de Venezuela», OEA/SER. H/XIV CIAP/178, 7 de noviembre de 1967, Unión Panamericana, Washington, DC, p. 3 (en adelante mencionado como «Informe del CIAP sobre Venezuela»).

² Arturo Sosa, «Structural Factor in Venezuela Economic Development» (artículo mimeografiado presentado en la Conferencia Sobre Venezuela de la Johns Hopkins School ad Advanced International Studies, 1969), p. 3.

30% del producto nacional bruto, 90% de los ingresos de exportación y 65%³ de los ingresos del erario público. Las empresas norteamericanas que operan en Venezuela son en gran medida corporaciones multinacionales con inversiones en otras zonas petroleras, particularmente en el Cercano Oriente. Cuando el gobierno capitalista democrático de Venezuela aumentó a 48% la participación del país en las ganancias, las corporaciones multinacionales comenzaron a acrecentar la producción en sus yacimientos del Cercano Oriente y Canadá. A raíz de ello, a partir de 1958 se produjo un descenso abrupto en las nuevas inversiones en el sector petrolero. Las compañías petroleras norteamericanas redujeron sus desembolsos de capital en Venezuela de tal manera que en 1960 la inversión estable bruta declinó en 22%.⁴ La política de Acción Democrática, no suficientemente radical para nacionalizar la industria petrolera y promover la expansión bajo el patrocinio público, ni suficientemente conservadora para suministrar a los inversores extranjeros la clase adecuada de alicientes, alentó el estancamiento. La carencia de expansión dinámica en el sector petrolero afectó a otras actividades económicas conexas, como la industria del acero, que provee las tuberías. Du-

rante el último medio siglo Venezuela ha experimentado el desarrollo del subdesarrollo, es decir la penetración y control crecientes por parte de inversores extranjeros, la dependencia creciente respecto a sectores económicos pertenecientes a extranjeros y la máxima vulnerabilidad frente a personas que adoptan decisiones desde el exterior. El contraste entre pasado y presente es sugestivo. En 1920 el petróleo constituía 2% del valor de las exportaciones; en 1960 el petróleo, en poder de los norteamericanos, constituye más de 90% del valor de las exportaciones (junto con la mina de hierro, de propiedad norteamericana, asciende a 97%), y no hay motivo para pensar que esa relación de dependencia cambiará con Caldera. El sector principal de la economía, la industria petrolera, está en **declinación**. El valor de las exportaciones petroleras en 1961 descendió 11% respecto a 1957. Entre 1962 y 1966 el total de las exportaciones bajó de 2, 5 a 2, 3 mil millones de dólares.⁵ Ha habido una reducción drástica de nuevas inversiones, estancamiento en la exportación, pocos pozos nuevos han comenzado a producir y la prospección

³ Guillermo Morón, «Venezuela», ed. Claudio Véliz. «Latin American and the Caribbean» Praeger, Nueva York, 1968, p. 144.

⁴ «Informe del CIAP sobre Venezuela», p. 5.

⁵ *Ibid.*, p. 94.

150 prácticamente ha cesado. El flujo neto de capital a Venezuela desde 1960 ha sido negativo.

El esfuerzo industrializador muestra señales de empobrecimiento: el índice de 11,1% para 1950-59 cayó por debajo de 7,5% en 1960-66. (El plan nacional establecía un índice de crecimiento de 13,5%).⁶ Existen indicios de que Venezuela puede estar a punto de agotar las oportunidades fáciles de desarrollo basadas en la sustitución de importaciones. Las industrias tradicionales de consumo constituyen todavía el grueso del producto manufacturero (52%), mientras que la industria pesada aún es un factor muy marginal, con sólo 10% de la producción.⁷ La subsistencia de un bajo poder de compra por parte de la mayoría de los venezolanos, obliga a la industria a buscar nuevos mercados en el extranjero, misión para la cual se encuentra singularmente mal equipada, dados los costos y beneficios altos que caracterizan la actividad industrial. El desarrollo industrial se ha basado en programas gubernamentales de «asistencia»: créditos, impuestos bajos, tarifas proteccionistas y fuertes inversiones infraestructurales, financiadas por los ingresos petroleros. Tras la barrera protectora establecida por los revolucionarios democráticos de

Venezuela, han surgido grandes empresas monopolísticas que producen a altos precios mercancías de calidad inferior. Según un informe industrial realizado en esta década, 196 unidades de la gran industria producían 60% de la producción industrial total.⁸

La estrategia de desarrollo capitalista democrático no se ha orientado en Venezuela hacia una utilización máxima de los recursos humanos existentes. Al centrarse en el desenvolvimiento de la industria intensiva de capital —en su mayor parte las decisiones se adoptan conforme a las necesidades de beneficios máximos de los inversores domésticos y extranjeros—, las nuevas empresas industriales no han absorbido la creciente fuerza urbana de trabajo. Los inversores, directores, profesionales, y, en grado mucho menor, los empleados y una tenue capa de trabajadores industriales sindicalizados, cosechan los beneficios de la expansión industrial. La mayor parte de la fuerza de trabajo urbana, no integrada directamente a la producción fabril, está excluida de los beneficios de la expansión industrial.

⁶ *Ibid.*, pp. 50-51.

⁷ «El desarrollo industrial de Venezuela», CORDIPLAN, 1968.

⁸ «Encuesta industrial de 1961», CORDIPLAN, noviembre de 1963.

Precisamente por medio del desarrollo capitalista subsidiado por el estado, las desigualdades se acentuaron. La desocupación ha oscilado entre 17 y 10% de la población económicamente activa en los centros urbanos.⁹ La desocupación disfrazada —en gran parte bajo la forma de minicapitalismo y de ocupaciones de subsistencia vinculadas al sector de servicios— y la desocupación son resultados del desplazamiento de los trabajadores rurales. Ambas derivan de la estrategia de desarrollo elegida por los políticos capitalistas democráticos venezolanos, orientada hacia los beneficios y el crecimiento intensivo del capital.

En sus esfuerzos para crear un clima favorable a los inversores privados, los líderes políticos adecos y de COPEI han creado un clima desfavorable para las reformas económicas y sociales. La evolución conservadora de los dirigentes adecos que dominaban el gobierno, contribuyó sustancialmente a la línea favorable a las empresas y a las prioridades que se establecieron. La hostilidad de la «guardia vieja» adecos contra los noveles grupos nacional-populistas dentro del partido, y contra los fidelistas y comunistas en los sindicatos y universidades, corrió pareja con un acercamiento a los grupos militares y de inversores. La

aceptación y fomento, por parte de AD, de las inversiones privadas domésticas y extranjeras en gran escala, requerían mantener controles rígidos sobre el movimiento sindical y los estudiantes, excluir la política de movilización de masas e instituir clientelas políticas. Muchas de las restricciones impuestas al debate político y económico posterior y la incapacidad de AD para lidiar con diversos problemas socioeconómicos claves, derivan un último análisis de su elección inicial de aliados y enemigos políticos. La exclusión posterior de la izquierda en lo referente a la acción política pública limitó, a su vez, la capacidad de los reformistas moderados, que habían quedado en AD, de movilizar efectivamente un apoyo para una política redistributiva más enérgica. Los vínculos establecidos entre la «guardia vieja» adecos y la comunidad financiera y de los negocios, se expresaron a través de: a) un convenio tácito con los militares, que incluía la conservación de una parte sustancial del presupuesto y la decisión de abandonar cualquier reorganización o reducción en las compras de armas; b) un acuerdo con las compañías petroleras de no nacionalizar sus propiedades; c) una alianza política formal con

⁹ «Informe del CIAP sobre Venezuela», p. 114.

152 el partido COPEI dominado por los empresarios, y más tarde con el ala derecha del Frente Democrático Nacional, derechista, dirigido por Arturo Uslar Pietri. Como permuta por el control de la administración estatal y por una oportunidad de promover los intereses de la clase industrial y directorial doméstica, la dirección de la guardia vieja de AD resolvió desechar su programa populista y antimperialista. Para los miembros socialmente móviles de la clase media, AD proporcionaba oportunidades de progreso, así como empleo a través de la expansión de la industria, el comercio y las oficinas públicas (los gastos administrativos crecieron 9% sólo en 1966). Los programas de asistencia social, financiados en gran parte con créditos de la industria petrolera, beneficiaron a los grupos de ingreso medio y medio-superior, esto es, a los que tenían empleo fijo, nivel profesional, acceso a los jefes políticos adecuados o a los funcionarios sindicales. La inversión pública declinó, pero los gastos «operativos» aumentaron a causa del exceso de personal burocrático, es decir, de partidarios de AD pagados por el gobierno.

La política estatal y el desarrollo económico siguieron dependiendo excesivamente del capital extranjero, pues la legisla-

ción impositiva está llena de escapatorias y la mayor parte de los venezolanos ricos son expertos en evasión de impuestos. Entre 1960 y 1966, el gobierno central se volvió, en lo referente a sus ingresos, cada vez más dependiente del petróleo. En 1960, 58,2% del ingreso gubernamental procedía del petróleo; en 1966 ese guarismo se había elevado a 62,6%.¹⁰ La burguesía venezolana disfruta de una de las tasas impositivas más bajas del mundo; los ingresos gubernamentales que derivan de la industria no petrolera siguen siendo bajísimos. Ante la perspectiva de una legislación de impuesto a la renta y seguridad social, la burguesía venezolana apeló al recurso extremo de retirar su capital, y el gobierno capituló.

Como la burguesía venezolana depende en grado sumo del capital norteamericano, cuando la industria petrolera no está en expansión los inversores domésticos pierden fácilmente la confianza; la inseguridad puede originar una fuga masiva de capital en un breve período, dada la facilidad con que puede transferirse el capital. Esta fuga, o la amenaza de la misma, hizo que la política de AD (y ahora de COPEI) dependiera ampliamente de la buena voluntad de los

¹⁰ *Ibid.*, p. 75.

grupos inversores extranjeros y locales, más que de las necesidades de los grupos de menor ingreso o de una planificación económica nacional.

La reforma agraria bajo el capitalismo democrático

La experiencia venezolana con la reforma agraria constituye un fracaso, por tres motivos: a) no ha debilitado sustancialmente el poder económico de los grandes terratenientes y, en consecuencia, la ayuda técnica y los programas crediticios han beneficiado ampliamente a los grandes granjeros comerciales; b) no ha proporcionado tierra a alrededor de dos tercios de los campesinos que se encuentran en estado de necesidad extrema; c) no ha proporcionado crédito suficiente, asistencia técnica y otros medios para promover el desarrollo de esas granjas en las cuales se ha instalado a los campesinos que recibieron tierras.

La ley de reforma agraria venezolana fue aprobada el 5 de marzo de 1960, en buena medida como resultado de un compromiso entre los grandes terratenientes y la intención original de Acción Democrática de efectuar un «cambio estructural profundo». En la época, se estimaba que el número de beneficiarios potenciales ascendía a 380 000 fami-

lias,¹¹ o sea, 2,2 millones de personas. Los campesinos sin tierra constituían algo más de 58% del total. Desde el comienzo del programa, aproximadamente 100 mil familias campesinas recibieron alguna parcela.¹² Los latifundistas no han opuesto resistencia a la «reforma agraria» venezolana. El gobierno pagó precios muy altos por la tierra de aquellos, con lo cual los terratenientes (que subieron sus precios para lucrar con la reforma agraria «democrática») pudieron obtener importantísimas ganancias, que en ciertos casos les permitieron comprar nuevas tierras en otras zonas. Por añadidura, la ley de reforma agraria, como norma, no se aplicó a las grandes plantaciones comerciales operadas eficientemente. De ahí que la mayor parte de las primeras expropiaciones afectaron a las granjas ruinosas y tierras públicas sin cultivar; unas y otras requerían inversiones enormes para su desarrollo, a lo cual se deben los costos altísimos que han insumido los únicos y limitados cambios ocurridos en Venezuela, costos que ningún otro país de América Latina podría sufragar. Entre

¹¹ J. Raul Alegret R., «Venezuelan Agrarian Reform: Its Impact and Outlook» (artículo mimeografiado presentado en la Conferencia sobre Venezuela de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, noviembre de 1969), p. 3.

¹² *Ibid.*, p. 7.

154 1963 y 1965 el grueso de la tierra (58%) provino de terrenos fiscales, ya que AD protegía y estimulaba el desarrollo de grandes y eficientes explotaciones agrarias comerciales.¹³ En conjunto, 45% de la tierra distribuida había sido de propiedad gubernamental, y en muchos casos no era la tierra mejor, ni la mejor ubicada respecto a los mercados. Hacia 1964 se abandonó el énfasis en la fase redistributiva de la reforma agraria. El director del Instituto Agrario Nacional señala que «el programa se orientaba hacia la consolidación física de los establecimientos agrícolas, con una atención creciente en el factor económico».¹⁴ En 1969 el mismo funcionario destacó el hecho de que la política agraria era una política de clase orientada hacia el capitalismo agrícola comercial: «Pocos progresos importantes se han alcanzado en cuanto a la reducción de la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, el crecimiento de la producción o ingreso de los campesinos, o en la formación y fortalecimiento de empresas y organizaciones económicas de pequeños granjeros.»¹⁵ Los beneficiarios de la reforma agraria aportan menos de 13% de la producción agrícola y sólo 5% de la carne.¹⁶ Además, los grandes granjeros comerciales controlan el desarrollo y la producción de los renglones más lucrativos. Como AD y COPEI

optaron por subsidiar a la clase latifundista, las limitaciones financieras han levantado enormes barreras contra la expansión del programa de reforma agraria, aun en el caso de que aquellos partidos quisieran o desearan aplicarlo.

La mayoría aplastante de los latifundios no ha sido afectada. Los grandes terratenientes, aunque menos importantes en el conjunto de la economía, disponen siempre de importantes recursos políticos y económicos que les permiten determinar la política para el desarrollo agrícola. Por ello, muchos de los «beneficiarios» de la reforma agraria trabajan para su mera subsistencia o han abandonado sus parcelas, forzados por un fracaso económico que, en gran parte, se debe a la carencia de créditos. Entre los beneficiarios de la reforma un 70% no usa productos químicos, un 62% no compra semillas, un 80% no compra animales y un 61% no adquiere máquinas.¹⁷ Tras la ideología del «terruño» y la retórica agrarista, la AD promovió la modernización de

¹³ Raúl Domínguez Capdeville, «El camino para una reforma agraria de tipo nacionalista», en *Ruedo Ibérico* no. 22-24, p. 255.

¹⁴ Alegrett, *op. cit.*, p. 6.

¹⁵ *Ibid.*, p. 6.

¹⁶ *Ibid.*, p. 7-9.

¹⁷ *Ibid.*, p. 9.

la agricultura en gran escala y la producción acrecentada de cosechas comerciales. Se ha desarrollado una nueva diferenciación de clase entre los «beneficiarios»: quienes tuvieron éxito inicial están en expansión, mientras que los que experimentaron dificultades ya no pueden aspirar a nuevos créditos: parcelas sin créditos equivalen al retorno al minifundio y a que el nuevo granjero, pese a tener una escritura de su propiedad, trabaje para su vecino más próspero. Un observador hizo notar que más de 50% de quienes se beneficiaron con la reforma agraria ganan menos de 250 dólares anuales en sus actividades agrícolas, mientras que menos de 12% ganaban 1 000 dólares o más.¹⁸ Pese a que los grandes granjeros comerciales constituyen tan sólo una pequeña fracción de la población rural, recibían más de la mitad de los créditos (491 950 000 bolívares, contra 475 605 000 bolívares para los campesinos).¹⁹

Los beneficios decrecientes de los campesinos reflejan el poder declinante del campesinado en la política nacional, tendencia que continúa con Caldera y COPEI. En el marco de la política agraria, los grandes granjeros comerciales obtienen una parte creciente de los beneficios mediante sus vínculos con la comercialización e industrializa-

ción de los productos agrícolas. En la coalición de AD el campesinado está cada vez más subordinado al capitalista urbano; en las zonas rurales, AD está crecientemente vinculada al granjero capitalista más eficiente y presta sólo una atención marginal a los beneficiarios que no han prosperado. Para las doscientas mil familias campesinas (2/3 de todos los campesinos) que no han recibido ninguna tierra, las perspectivas que les ofrecen los partidos políticos burgueses son sombrías. Mientras que el índice de crecimiento per cápita es apenas adecuado, el nivel de ingresos del grueso de la población rural continúa en el nivel de subsistencia.

Los agricultores capitalistas son un componente importante de la clase dirigente nacional, pese a la insignificancia «cuantitativa» del aporte agrícola al PNB. Se han elegido representantes de la Federación de Granjeros y de la Federación de Ganaderos para altos cargos de la principal organización venezolana que representa a las empresas (Fedecámaras).²⁰

La burocratización de las organizaciones campesinas y de los sin-

¹⁸ *Ibid.*, p. 11.

¹⁹ «Informe del CIAP sobre Venezuela», p. 45.

²⁰ Alegrett, *op. cit.*, pp. 13-14.

156 dicatos, y paralelamente los intentos de «despolitizar» la adopción de decisiones económicas (esto es, permitir que las élites empresariales y sus agencias políticas tracen y administren los planes gubernamentales), sugieren que existe un grado considerable de integración directa entre las esferas políticas y económicas de élite. El modelo de dependientes, representantes de los intereses de las masas, se dejan ver menos que las instituciones de representación funcional dominadas por intereses económicos de élite. El modelo de política estatal-corporativa toma cada vez más vuelo no sólo en Venezuela sino en toda América Latina. Rotular de democrática la política venezolana es sumamente equívoco: la burocratización, el apoliticismo y tecnocratismo se ajustan perfectamente a la nación empresarial conservadora de armonía de clases y a la idea católica tradicional de una sociedad orgánica. Los valores sociales y políticos del catolicismo tradicional están vinculados a las necesidades de desarrollo capitalista moderno. La planificación y el desarrollo económicos tal como se presentan hoy, utilizan los ideales democráticos como fachada para una adopción de decisiones oligárquica y elitista. Las personas que realmente trazan los principales programas políticos se re-

clutan entre las grandes empresas, y hay un intercambio continuo de personal, de la política a los negocios y viceversa. La red, intrincada y compleja, de relaciones de interacción entre intereses económicos privados y partidos dominantes, agencias administrativas y cuerpos ejecutivos limita drásticamente los tipos de problemas considerados y las opciones e instrumentos accesibles a los planificadores públicos en su tarea de concebir una política económica y social.

La política agrícola bajo el presidente Caldera guarda relación escasa con las necesidades del millón o millón y medio de campesinos sin tierra, o casi sin ella, e incluso con la parte de los campesinos que recibieron una parcela bajo el gobierno adeco. La atención gubernamental se centra en la promoción de los intereses de una minoría de granjeros y empresarios grandes y medianos. Bajo la bandera de «promover la productividad», los «revolucionarios» socialcristianos de Venezuela, electos en parte sin votos campesinos, han echado mano al erario público para proporcionar incentivos y promover la productividad de la élite. La política electoral en Venezuela es en gran medida el medio por el cual los corredores políticos en el poder regatean con las élites económicas: intercambian ren-

tas públicas y legitimidad para su propio avance social y el de los clientes inmediatos, mientras mantienen el mito de una «democracia pluralista».

Los costos de la estabilidad política

Las posiciones adoptadas por el presidente venezolano Rómulo Betancourt durante su período de gobierno (1959-1964) constituyeron un repudio directo de los programas nacionalistas y populistas de Acción Democrática. En una jugada para aplacar los temores de la comunidad empresarial norteamericana y venezolana, Betancourt desechó la idea de nacionalizar las industrias claves, como la petrolera. AD aceptó la dependencia de Venezuela respecto al capital norteamericano y procuró simplemente aumentar su parte de las ganancias. Del mismo modo, AD rechazó la idea de una expropiación rápida y completa de las grandes haciendas y se volcó a la colonización de tierras fiscales, costosos pagos por los terrenos privados adquiridos y subsidios para modernizar y hacer más eficiente la producción de los latifundios. El aparato administrativo civil, policial y militar quedó intacto; la expansión de la burocracia para satisfacer los reclamos de prebendas planteadas por los partidarios de AD,

constituyó el cambio principal. El viejo aparato administrativo, en gran parte producto de los gobiernos conservadores anteriores, era prácticamente insensible a las demandas populares de innovaciones sociales. Con vistas a gobernar, Betancourt optó por llegar a un arreglo con las principales instituciones del viejo orden, los inversores extranjeros y locales, los militares y los latifundistas. Fundándose en un partido extremadamente burocratizado y un aparato sindical vinculado estrechamente a la burocracia gubernamental (el Ministerio del Trabajo financiaba el aparato organizativo y las actividades de la Federación Campesina, dominada por AD-COPEI) y merced a una importante asistencia financiera del tesoro público y el apoyo físico de la policía y el ejército, Betancourt, Leoni y el ala de extrema derecha adeca estuvieron en condiciones de expulsar del partido a los populistas, nacionalistas y reformistas moderados. El nuevo orden político estructurado por la AD purgada y conservadora, implicaba un espectro de partidos y opiniones mucho más estrecho. El juego político se basaba en un consenso **contrario** a la nacionalización del petróleo, a la expropiación extensiva y rápida de los grandes latifundios privados y a la movilización de masas. Para conver-

158 tir a Venezuela en una democracia capitalista, se lanzó una represión al por mayor que impidiera la movilización masiva de los estudiantes nacionalistas y los subocupados y desocupados de Caracas. Simultáneamente se frustraron intentos conspirativos de los partidarios de Pérez Jiménez, que procuraban tomar el poder. El nuevo orden político fue establecido por la fuerza pese al importante desafío revolucionario de las fuerzas nacionalpopulistas a lo largo del período 1959-63. A las revueltas estudiantiles y manifestaciones populares siguieron acciones guerrilleras y levantamientos militares.²¹ La derrota de la izquierda revolucionaria y de la derecha perezjimenista antiparlamentaria se debió en buena medida a la cooperación y apoyo que Betancourt recibió de la policía y el ejército venezolanos y de los funcionarios gubernamentales, inversores y misiones militares de Estados Unidos. La relativa estabilidad política lograda desde 1964 se basa en la colaboración entre AD y los partidos de la derecha, orientados políticamente por las empresas. La estabilidad política se funda en la capacidad manifestada por esos partidos de solucionar discrepancias políticas y de unirse contra sus enemigos comunes sociales y políticos. Una legislación que liquidara los privilegios y prerrogativas

de los partidos que forman ese consenso, llevaría muy probablemente a un atolladero político. La estabilidad política ha sido alcanzada al precio de la incapacidad del sistema político para redistribuir los ingresos, aprobar un progresista impuesto a la renta, y resolver los problemas que plantean la desocupación masiva y las empresas monopolísticas e ineficientes que producen bienes de consumo a precios exorbitantes. Entre tanto, AD se ha convertido en un partido cada vez más carente de corrientes reformistas: en 1960 rechazó la posición presentada por su sector juvenil, «Documento de los jóvenes de Acción Democrática», que más adelante formaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); en 1962 purgó al dirigente nacional de los sindicatos campesinos Quijado, porque éste exigía una reforma agraria cabal; en 1968 perdió a los reformistas moderados dirigidos por Luis B. Prieto Figueroa (expresidente de AD entre 1964-67), quienes fundaron el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Al entrar en 1970, Acción Democrática está compuesta principalmente por

²¹ Este problema se analiza más pormenorizadamente en un ensayo anterior, «Revolution and Guerrilla Movements in Latin American, Venezuela, Guatemala, Colombia and Peru», de James Petras y Maurice Zeitlin, en *Latin American: Reform or Revolution*, Fawcett, Nueva York, 1968, pp. 329-369.

burócratas partidarios que comparten una hostilidad profunda contra el cambio social en gran escala, una aceptación general de los valores empresariales y una obsesión por las sinecuras del poder.

Desarrollo social y reforma urbana

Los líderes políticos capitalistas democráticos de Venezuela enfrentan muchos de los mismos agudos problemas sociales en las áreas urbanas que confronta el resto de América Latina: desocupación, vivienda y educación inadecuadas y grandes desigualdades en los ingresos.

En el dominio de la vivienda, numerosas instituciones han gastado considerables sumas de dinero en la construcción urbana. En cerca de 40 años el Banco Obrero sólo invirtió 1,9 mil millones de bolívares en viviendas, de los cuales 60% correspondió a Caracas.²² La construcción privada alcanza a varios cientos de millones de bolívares. Sin embargo, 50% de las familias de la capital no pueden permitirse la adquisición de una casa, pública o privada, debido a sus bajos ingresos.²³ Los revolucionarios capitalistas democráticos no sólo han fracasado en la solución de los problemas de vivienda que se plantean a los grupos de ingresos reducidos, sino que han

sido testigos de la creciente «tugurización» de Caracas. Un urbanista venezolano ha señalado que mientras los **barrios** (tugurios) cubrían 5% del total de áreas urbanizadas en 1938, ese guarismo era de 15% en 1959 y de 18% en 1966.²⁴

Los tugurios están situados en zonas inundables y padecen de una carencia casi total de saneamiento. En ellos vive 30% de la población de Caracas.²⁵ La mayor parte de los recursos financieros gubernamentales y privados que han producido el «bum» de la construcción en Caracas ha beneficiado a las clases altas y medias. Un informe de la Comisión Interamericana de la Alianza para el Progreso puntualizaba: «En lo tocante a la vivienda (...) la falta de acceso por parte de los grupos de menores ingresos constituye una falla grave en la estructura social venezolana.»²⁶

Los políticos capitalistas democráticos y sus defensores en Es-

²² Alberto Morales Tucker, «The Dilemma of Venezuela: The Case of Caracas» (trabajo mimeografiado presentado en la Conferencia sobre Venezuela de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, noviembre de 1969), p. 6.

²³ *Ibid.*, p. 21.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ «Informe del CIAP sobre Venezuela», p. 17.

160 tados Unidos han dado publicidad a sus éxitos educacionales, junto a la reforma agraria, como sus mayores logros.

De cada cinco niños que ingresan a la escuela uno completa los seis años de primaria en las zonas rurales, y sólo uno de cada tres en el conjunto de la nación²⁷. Aunque se progresó algo en los primeros años de esta década, a partir de entonces la situación no ha mejorado y puede haber empeorado, incluso. Según un observador, los alumnos de las escuelas rurales pasaron de 314 194 en 1959-60 a 291 537 en 1967-68.²⁸ En Caracas la proporción de niños que no van a la escuela subió de 17% en 1961 a 25% en 1966,²⁹ al deteriorarse el nivel de la educación pública. Los grupos de ingresos altos y medianos recurren cada vez más a las escuelas privadas como medio de preparar a sus hijos para el ingreso a las actividades mejor remuneradas. Bajo los gobiernos capitalistas democráticos la educación no ha sido un vehículo que haga accesible la sociedad a las clases inferiores, sino un medio de renovar y reforzar las amplias desigualdades socioeconómicas. El fracaso de AD-COPEI en elevar el nivel de la vivienda, los ingresos y el empleo de los pobres urbanos y rurales, en eliminar la explotación y así asegurar la vida familiar de las clases bajas, es

el motivo del alto índice de deserción escolar. La expansión cuantitativa de disponibilidades y gastos educacionales ha contribuido poco o nada a democratizar la sociedad venezolana.

Los desocupados y subocupados rurales, que llegan a 55% de la población económicamente activa, toman parte en un enorme éxodo hacia Caracas y otras ciudades.³⁰ Muchos de los refugiados rurales trabajan en los empleos peor pagados del sector de servicios. Mientras que el petróleo y la minería proporcionan 600 nuevos empleos cada año y la industria 10 500, el comercio y los servicios suministran 26 800.³¹

El sector terciario contiene ahora 43% de la población económicamente activa, frente a 18% en el sector secundario; en otras palabras, por cada obrero industrial hay 2,3 trabajadores en los servicios.

Más específicamente, por cada obrero industrial hay dos traba-

²⁷ José Rafael Revenga, «The efficacy of Education in Venezuela» (trabajo mimeografiado presentado en la Conferencia sobre Venezuela de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, noviembre de 1969).

²⁸ *Ibid.*, p. 3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alberto Morales Tucker, *op. cit.*, p. 32.

³¹ Cifras anuales tomadas de Revenga, *op. cit.*, tabla 1.

jadores en el servicio doméstico.³² En términos de distribución de ingresos, la amplia desigualdad existente en la década de 1950 persistió durante los años de dominio capitalista democrático. El 30% inferior de la población obtiene 6% del ingreso nacional, mientras que el 10% superior logra 38% del ingreso nacional.³³

El abismo probablemente es mucho más hondo, en virtud de que grandes sumas de ingresos no informados afluyen a los inversores y financistas de las clases altas.³⁴

Conclusión

Los partidos capitalistas democráticos han desempeñado un papel importante en la estabilización de las relaciones de propiedad capitalista y en la defensa de las prerrogativas de la élite empresarial en la sociedad venezolana. Como ha señalado perspicazmente un estudioso de la política venezolana, «el poder real en el sector económico está en manos de los (...) conglomerados que no tienen necesidad de un grupo de intereses intermedios en sus tratos con el gobierno». ³⁵ La política venezolana ha permitido la discusión y competencia libres entre los partidos que preconizan diversas estrategias para el desarrollo **capitalista**. AD-COPEI sirvieron de instrumentos para derrotar un desafío

nacional-populista, que amenazaba socavar los puntales propietarios de la sociedad venezolana; rechazaron con éxito el desafío de la derecha, que procuraba desplazar el parlamento en beneficio de un régimen autoritario centralizado. En lo social AD creó un grupo de granjeros de clase media en el campo: su reforma agraria benefició sustancialmente alrededor del 15% de los campesinos que antes carecían de tierra.

Mediante la expansión del sistema educacional y de instituciones del gobierno, AD aumentó las oportunidades de que dispone la clase media inferior y media. Creó agencias gubernamentales que se ocupan del desarrollo y proporcionan asistencia técnica a los empresarios urbanos y rurales. Al mismo tiempo, la red organizativa de AD logró aislar efectivamente a la masa de los habitantes de los **barrios** y de los campesinos sin tierra respecto de los partidos políticos izquierdis-

³² José Agustín Silva Michelena, «El siglo XX, en *Ruedo Ibérico* no. 22-24, p. 99.

³³ «Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina: Anexo Venezuela», CEPAL E/CN/ 12/770, octubre de 1966.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ David Blank, «Political Conflict and Industrial Planning in Venezuela» (trabajo mimeografiado presentado en John Hopkins School of Advanced International Studies, noviembre de 1969), p. 16.

162 tas y de los grupos que procuran enunciar sus agravios. Ante la ausencia de la izquierda, el COPEI derechista y la derecha antiparlamentaria han capitalizado el descontento de las masas excluidas, especialmente en Caracas, desplazando la influencia adeca. La elección de Caldera a la presidencia y el resonante triunfo electoral de Pérez Jiménez en la elección senatorial caraqueña de 1969 constituyen indicios de que el populacho rechaza la integración adeca con los estratos medios burocráticos y propietarios.

El partido Acción Democrática ha seguido una estrategia de desarrollo socioeconómico orientada principalmente a la promoción de la clase media, dentro de los límites trazados por los intereses de los propietarios norteamericanos y venezolanos. En este dominio tuvo, en grado considerable, un éxito. No obstante, los capitalistas democráticos no han modificado la estructura económica semicolonial de Venezuela. El desarrollo económico del país permanece a merced de las decisiones de los intereses petroleros norteamericanos. Por añadidura, los nuevos capitalistas «nacionales» de Venezuela son sumamente dependientes de los intereses corporativos norteamericanos. A título de ejemplo, señala un escritor: «Muchos de los

fabricantes de repuestos, aparentemente independientes, de hecho son «cautivos» de una compañía automovilística de montaje, de propiedad extranjera, ya que la producción de aquéllos se vuelca casi exclusivamente en el montaje de ese automóvil en particular». ³⁶ El drenaje de capital venezolano por la remesa de beneficios de las empresas en manos de inversores norteamericanos, ha sido un factor importante del estancamiento económico general de Venezuela. Los beneficios e intereses anuales alcanzan promedialmente a 650 millones de dólares. ³⁷ Por cada nuevo dólar invertido, los inversores norteamericanos ganan tres. ³⁸

Las aspiraciones políticas y los apetitos socioeconómicos de los empresarios, burócratas y profesionales (especialmente abogados) de clase media, han alcanzado amplia satisfacción a través de la participación y actividad de sus representantes partidarios en el congreso y el ejecutivo. A los representantes políticos de esos mismos estratos medios les cabe ampliamente la responsabilidad de haber transformado el estado

³⁶ *Ibid.*, p. 32.

³⁷ D. F. Marcos Zavala, «Problemas principales y situación actual», en *Ruedo Ibérico* no. 22-24, p. 58.

³⁸ Rodolfo Quintero, «Las tres conquistas de América Latina», en *Ruedo Ibérico* no. 22-24, p. 44.

en un instrumento de desarrollo industrial capitalista, en la medida limitada en que éste se ha producido. Con vistas a lograr la estabilidad política necesaria para los objetivos económicos urbanos, los políticos de clase media organizaron un apoyo campesino y crearon una nueva clase agraria comercial. La «reforma agraria» venezolana empeoró; se ha visto limitada por el principio fundamental de AD: **una base política de apoyo para el desarrollo capitalista urbano y rural.** Una vez que se creó una base política firme entre los agricultores comerciales, AD viró de la reforma a la «modernización»; AD-COPEI sólo ha alcanzado un logro: el de iniciar el desarrollo

capitalista y, luego, el de representar los intereses de los exitosos estratos medios administrativos y propietarios. Al actuar así, AD se mostró dispuesta a sacrificar las necesidades socioeconómicas de la gran mayoría del pueblo venezolano; la independencia de la economía venezolana respecto a la dominación de Estados Unidos; las libertades (y vidas) de la joven generación de nacionalistas y revolucionarios venezolanos. Difícilmente el resultado del esfuerzo capitalista democrático de Venezuela resulte atractivo a las empobrecidas masas de América Latina, a los nuevos nacional-populistas en la iglesia y el ejército o a los estudiantes e intelectuales revolucionarios en las universidades.



AHORA un vendaje adhesivo
que no duele al quitarse



NO
ESTO!



SINO
ESTO!

La Exclusiva Compresa TELFA* se
halla sólo en los NUEVOS

CURITAS*

Los vendajes plásticos CURITAS con su nueva compresa TELFA no se adhieren a las heridas—no levantan la costra, ayudando así una cicatrización mejor y más rápida. Los vendajes plásticos CURITAS permanecen nítidos y limpios, son impermeables y pueden lavarse.

Asegúrese de obtener *genuinos*
CURITAS, elaborados sólo por

Bauer & Black
División de The Kendall Company
Chicago, E. U. A.

Marca Registrada